

Asunción, 15 de enero de 2025.-

**SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CONES):**

**ISMAEL FENNER y RICARDO ANTAR MOREL**, por derecho propio y bajo patrocinio de los abogados **RICHAR SAUL ROJAS LÓPEZ**, con Matrícula de la C.S.J. N° 35.215 y **GUSTAVO LEGUIZAMÓN**, con Matrícula N° 36.395, constituyendo domicilio real y procesal para todos los efectos en la calle: **Augusto Roa Bastos N° 422 casi Avda. España de esta Capital a V.S.** respetuosamente decimos:

## **I. OBJETO**

Que, en tiempo y forma, venimos a interponer **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra la **Resolución CONES N° 934/2025 de fecha 30 de diciembre de 2025**, por la cual se habilitaron los programas de posgrado **Doctorado en Ciencias de la Educación y Especialización en Didáctica Universitaria**, solicitando su **revocación total**, por encontrarse viciada de nulidad manifiesta al incumplir los **requisitos esenciales de regularidad y validez del acto administrativo**, previstos en los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 de la normativa aplicable.

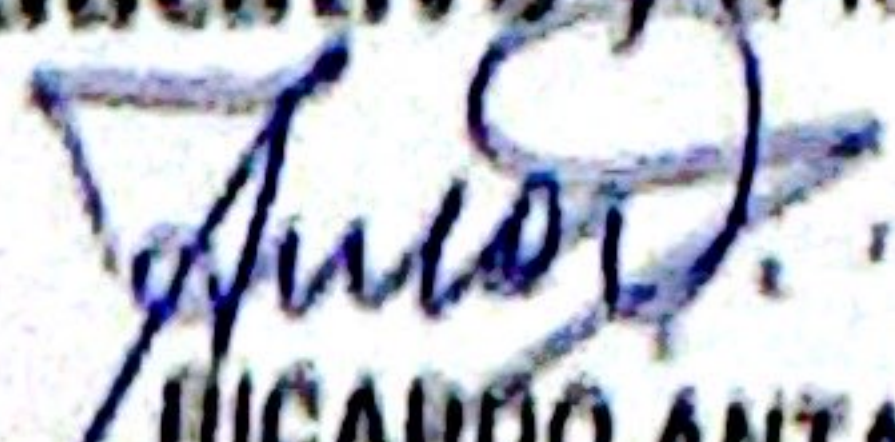
1

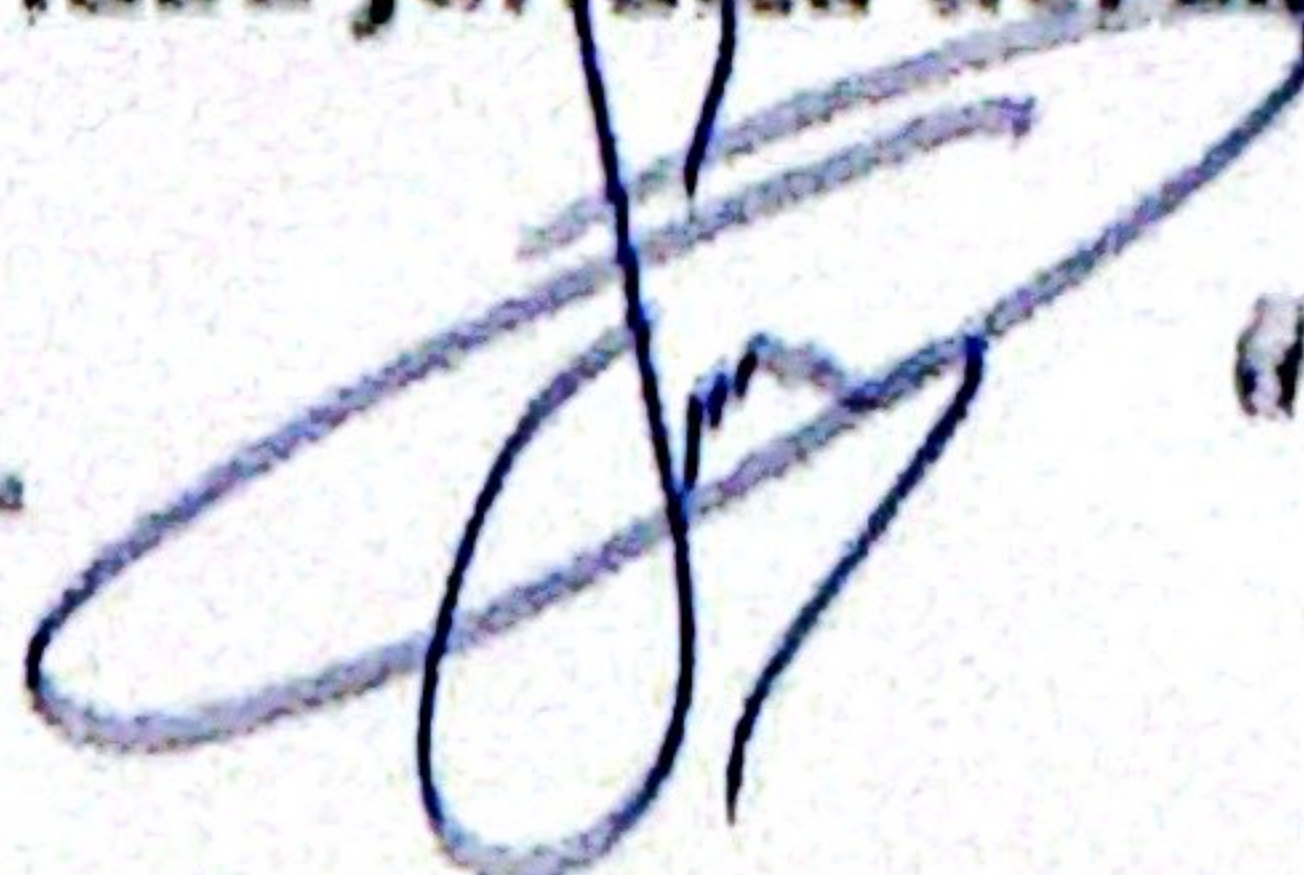
## **II. ANTECEDENTES RELEVANTES**

El ISICS fue reconocido por **Ley N° 2972/2006**. La titularidad del Instituto pertenece **íntegra, exclusiva e ininterrumpidamente** a los recurrentes desde la **Cesión de Derechos y Acciones otorgada por Escritura Pública N° 64/2016**, acto jurídico **oneroso, válido y plenamente vigente**, homologado judicialmente en el año 2025.

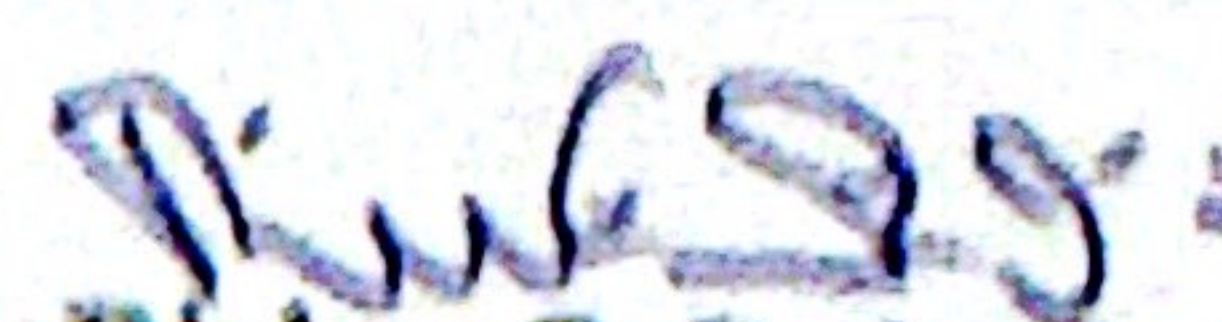
Jamás hemos transferido, cedido ni autorizado a tercero alguno a actuar en nuestro nombre. Sin embargo, personas **absolutamente carentes de legitimación jurídica** se presentaron ante el CONES como supuestos titulares del ISICS, circunstancia que fue **formal, expresa y reiteradamente advertida** por nuestra parte, sin que el CONES haya exigido el **documento esencial de transferencia de derechos**, inexistente hasta la fecha.

Pese a ello, el CONES dictó la Resolución impugnada, habilitando ofertas académicas **nunca solicitadas ni consentidas por los legítimos propietarios**, generando una grave afectación al **derecho de propiedad**, al **orden público educativo** y a la **seguridad jurídica del sistema de educación superior**.

  
**RICARDO ANTAR MOREL**  
ABOGADO  
Matrícula C.S.J. N° 13.395



  
**Gustavo Leguizamón**  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 36.395

  
**Richar S. Rojas L.**  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

### III. VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

#### 1. Violación del principio de legalidad – Artículo 7.

El acto impugnado carece de autorización jurídica válida, al haberse dictado **sin verificar la legitimación de los solicitantes**, omitiendo exigir el título jurídico que acredite la titularidad o representación del ISICS. La Administración no puede habilitar ofertas académicas basándose en **apariencias documentales** (estatutos o declaraciones unilaterales), cuando la ley exige **acto jurídico válido de transmisión de derechos**, inexistente en el caso. Ello torna el acto **manifiestamente ilegítimo**.

#### 2. Incompetencia funcional y material – Artículo 8.

El CONES excedió su competencia al **reconocer implícitamente derechos de titularidad y representación** que no le fueron acreditados conforme a derecho. La competencia administrativa para habilitar programas académicos **presupone necesariamente** la verificación previa de la legitimación del solicitante; sin dicho presupuesto, la decisión resulta jurídicamente inválida.

#### 3. Desviación de finalidad – Artículo 9.

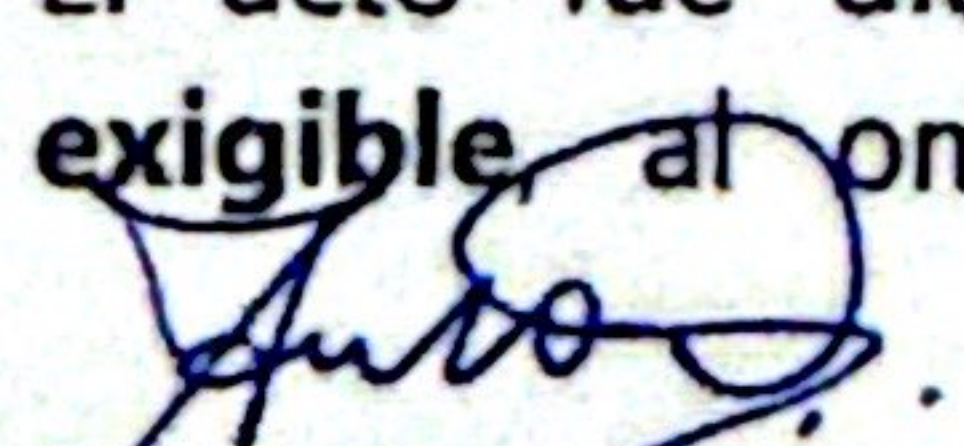
La finalidad de la potestad conferida al CONES es **proteger el interés público educativo**, garantizar la regularidad institucional y la validez de las ofertas académicas. Al habilitar programas solicitados por personas sin legitimación, el acto persigue un fin **ajeno al previsto por la norma**, tolerando una situación irregular que expone a estudiantes a títulos potencialmente nulos, vulnerando los principios de **razonabilidad y proporcionalidad**.

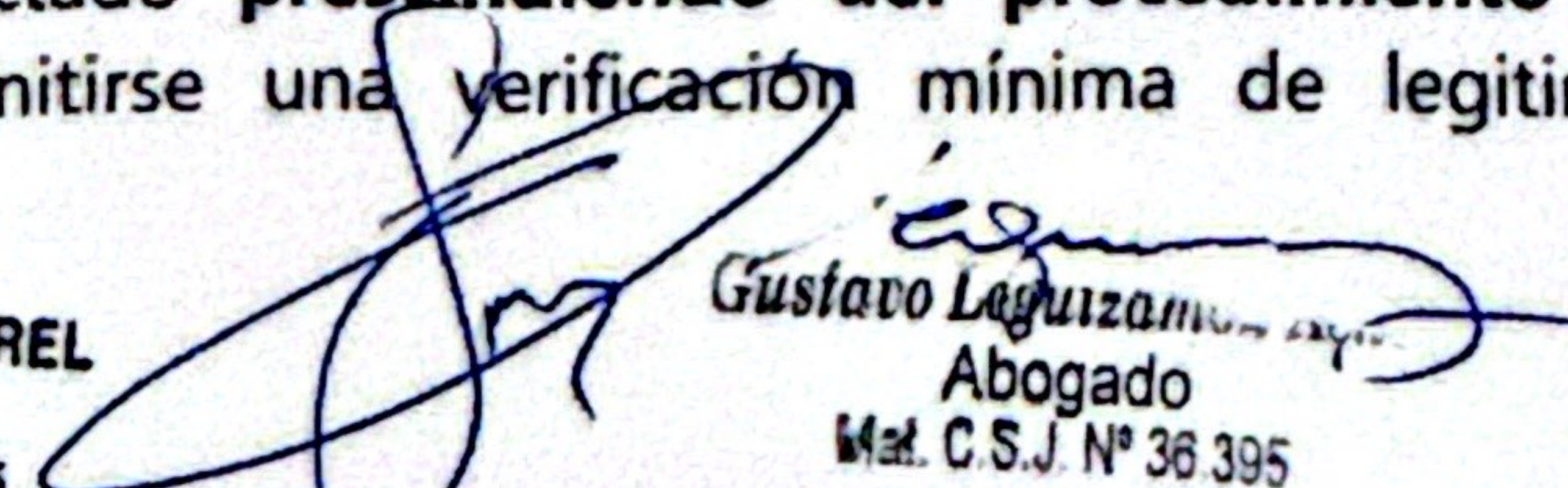
#### 4. Inexistencia de causa y falta de motivación – Artículo 10.

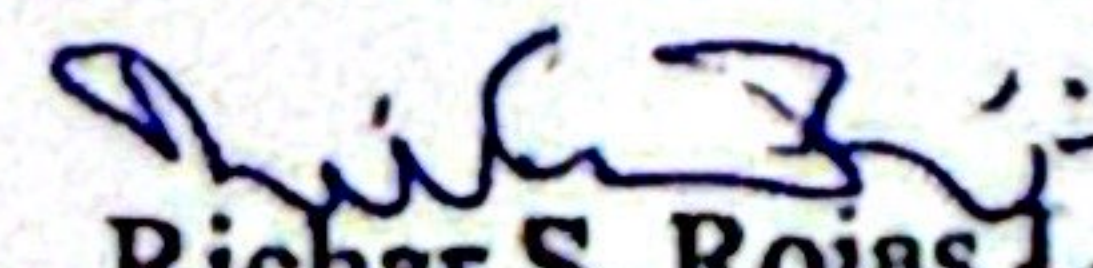
La Resolución CONES N° 934/2025 no se funda en antecedentes de hecho y de derecho válidos. No se explica ni acredita **cómo ni por qué** se tuvo por legitimados a los solicitantes, ni se correlacionan los antecedentes con el caso concreto. La omisión del análisis del presupuesto básico —la titularidad del ISICS— evidencia una **ausencia total de causa válida**, configurando un vicio esencial del acto.

#### 5. Inobservancia del procedimiento – Artículo 11.

El acto fue dictado **prescindiendo del procedimiento legalmente exigible**, al omitirse una verificación mínima de legitimación y al

  
RICARDO ANTAR MOREL  
ABOGADO  
Matricula C.S.J. N° 13.395

  
Gustavo Leguizamón  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 36.395

  
Richar S. Rojas  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

ignorarse las presentaciones y advertencias formales de los propietarios legítimos.

Asimismo, se vulneró el **derecho de petición y de defensa**, al no darse respuesta sustancial a los reclamos formulados, consolidando una actuación administrativa arbitraria y carente de debido proceso.

#### IV. GRAVEDAD INSTITUCIONAL

La subsistencia del acto recurrido genera:

- Lesión directa al **derecho constitucional de propiedad**.
- Riesgo cierto e inminente para el **derecho a la educación** de terceros.
- Afectación al **orden público educativo** y a la credibilidad del sistema de educación superior.

#### V. DE LA SANCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES. NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

De acuerdo con lo establecido en el **Capítulo IV sobre la sanción de las irregularidades del acto administrativo**, los problemas detectados en la Resolución CONES N° 934/2025 **no son errores menores o formales**, sino **fallas graves**, que afectan directamente su validez y legalidad. Por tal motivo, el acto no puede producir efectos jurídicos válidos y debe considerarse **nulo**, conforme se explica a continuación.

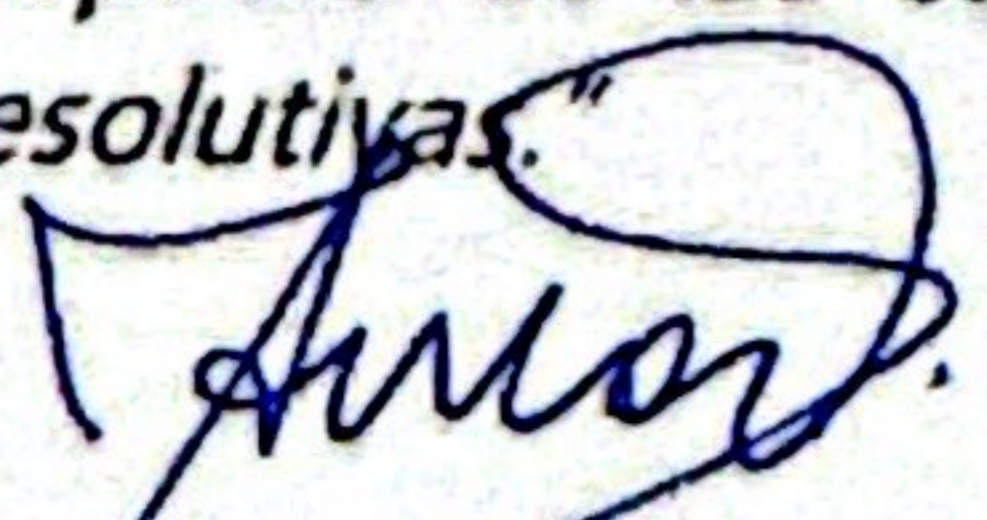
3

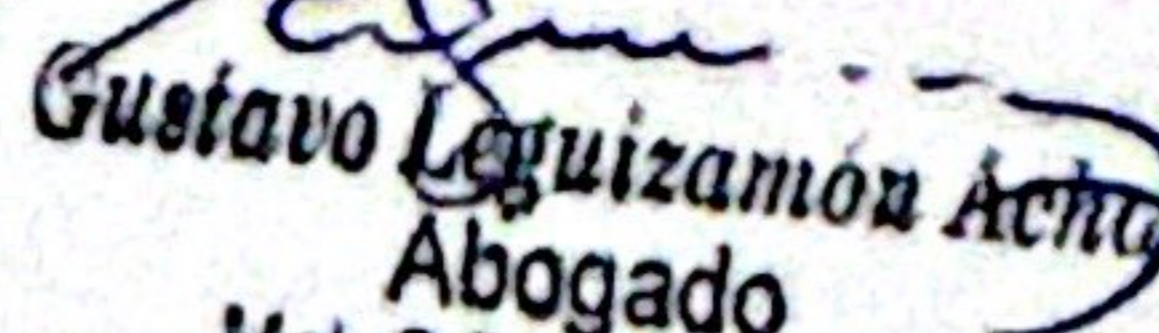
##### 1. Por qué el acto debe considerarse nulo – Artículo 19

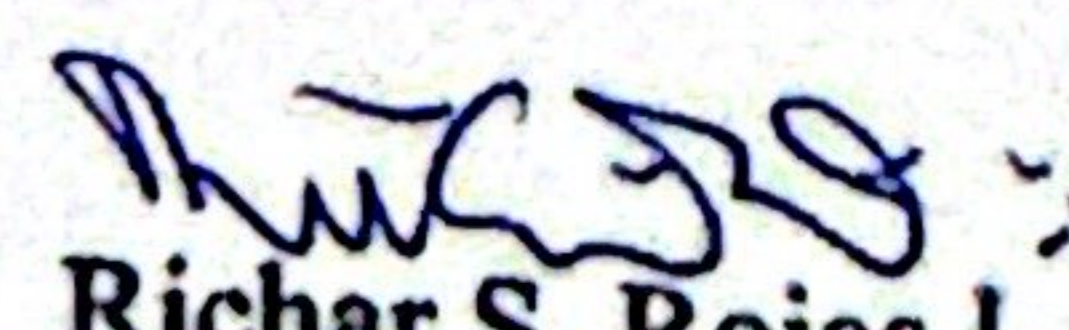
La Resolución CONES N° 934/2025 presenta irregularidades de tal gravedad que afectan derechos básicos de los recurrentes, como el **derecho de propiedad**, el **derecho a un procedimiento administrativo justo** y la **seguridad jurídica**.

Esta situación fue **advertida de manera formal, expresa y reiterada** ante el CONES y el Ministerio de Educación y Ciencias, solicitando la verificación de la **legitimación jurídica** de quienes pretendían habilitar programas de posgrado.

El propio CONES reconoció la existencia de este problema mediante la **Nota CONES N° 290/2025 de fecha 23 de diciembre de 2025**, en la que expresó: *"Del análisis de las presentaciones realizadas, se advierte que las mismas contienen referencias a cuestiones de orden privado y societario (...) respecto de las cuales este Consejo carece de competencia y de facultades resolutivas."*

  
RICARDO ANTAR MOREL  
ABOGADO  
Matricula C.S.J. N° 13.395

  
Gustavo Leguizamón Acha  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 36.995

  
Richar S. Rojas L.  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

Aun así, y sin que hubiese cambiado ningún hecho ni documento, el CONES dictó la Resolución impugnada, habilitando programas académicos **precisamente a favor de personas cuya legitimación afirmó no poder examinar.**

Es decir, **el CONES dijo que no podía verificar la propiedad, pero a contrario sensu actuó como si ya estuviera verificada.** Rechazó analizar el derecho, pero simultáneamente **resolvió como si el derecho existiera.**

Bajo este criterio, cualquiera podría presentar mañana un estatuto autoproclamándose propietario de la **Universidad Americana**, y el CONES, siguiendo el mismo razonamiento, estaría obligado a **creerlo sin exigir escritura pública, cesión de derechos ni respaldo legal alguno**, porque, paradójicamente, *no puede examinarlo, pero sí actuar como si lo hubiera hecho.*

Lo que cabía esperar de un organismo responsable y diligente era que el CONES **actuara con mayor cautela institucional**, condicionando, en todo caso, la habilitación de los programas a la presentación del **documento que acredite fehacientemente la titularidad respecto al ISICS**, o, en su defecto, a la existencia de **resolución judicial que lo confirme.**

Tal proceder deja en evidencia la **contradicción estructural** del acto, vulnerando principios fundamentales como **legalidad, seguridad jurídica y razonabilidad**, y confirma que la Resolución fue dictada **sin el presupuesto esencial que la habilita**, imponiendo su **nulidad absoluta**, conforme al artículo 19.

4

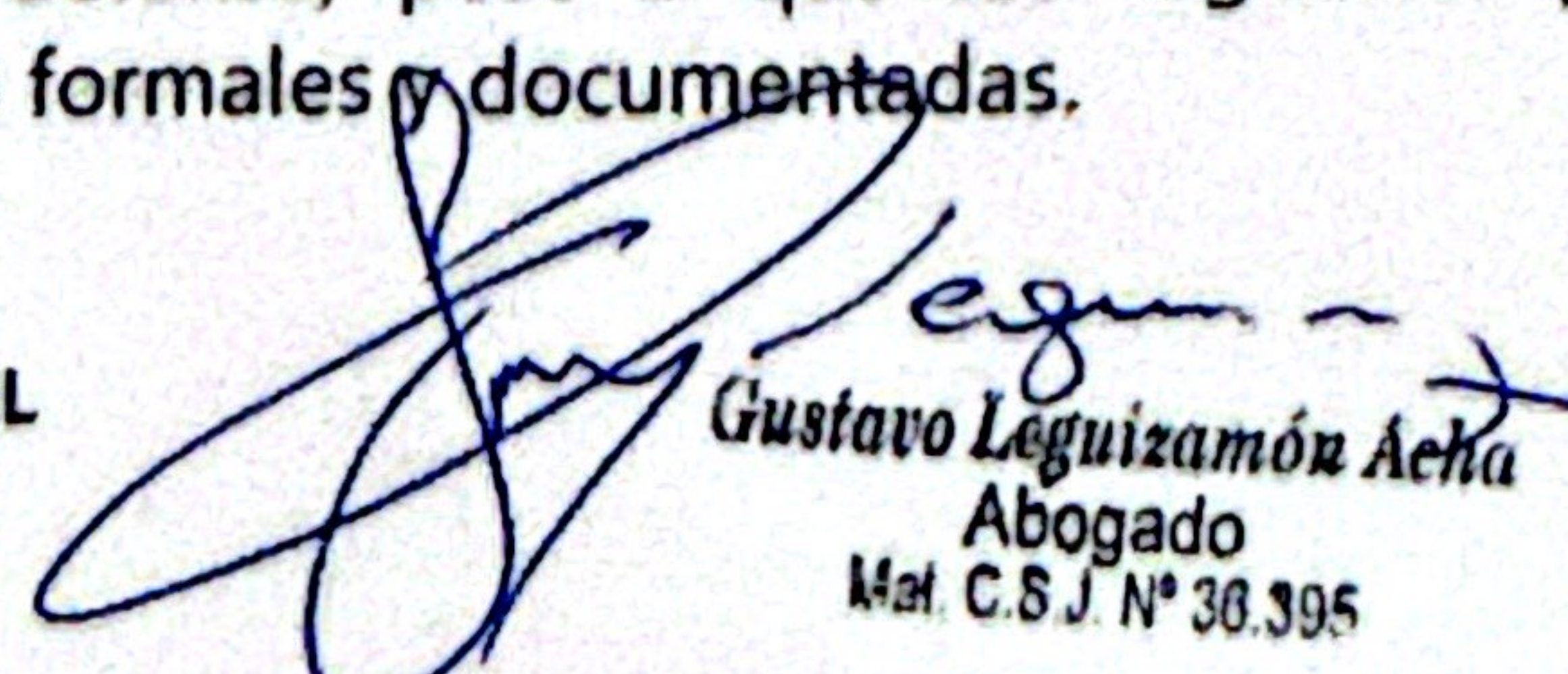
Al no cumplirse este requisito esencial, la ley prevé como consecuencia la **nulidad del acto.**

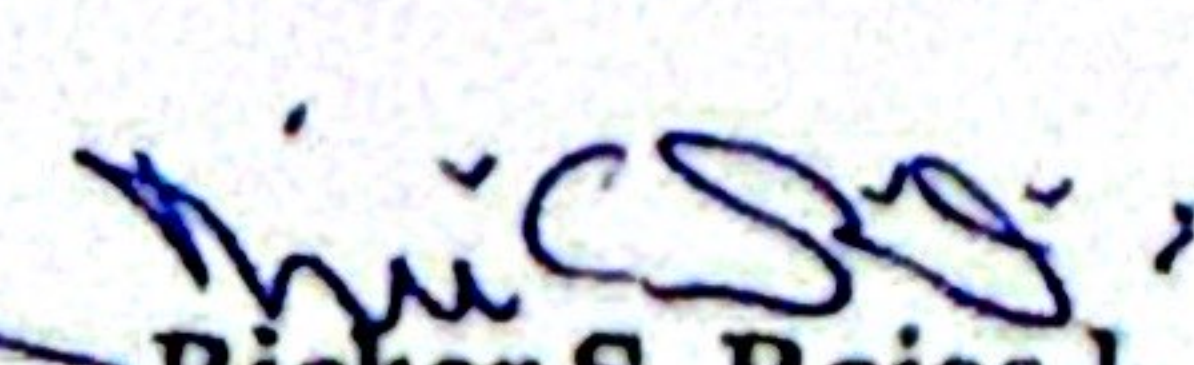
## 2. Existencia de causas concretas de nulidad – Artículo 20

En este caso se dan varias situaciones previstas expresamente por la ley como causales de nulidad:

- **Falta de fundamento real:** la habilitación de los programas se basó en una supuesta titularidad o representación del ISICS que **no existe legalmente** y nunca fue acreditada con documentos válidos, y repito si fueron presentados son documentos de **CONTENIDO FALSO.**
- **Incumplimiento del procedimiento legal:** no se verificó quién tenía realmente derecho a solicitar la habilitación, ni se respetaron las garantías básicas de defensa, pese a que los legítimos propietarios realizaron advertencias formales y documentadas.

  
RICARDO ANTAR MOREL  
ABOGADO  
Matricula C.S.J. N° 13.395

  
Gustavo Leguizamón Acha  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 30.395

  
Richar S. Rojas L.  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

- **Error evidente:** se aceptaron presentaciones realizadas por personas que no tenían derecho alguno, lo que llevó a una decisión equivocada y alejada de la finalidad legal del CONES.

Estas irregularidades afectan aspectos esenciales del acto, por lo que **no pueden corregirse posteriormente** y conducen a su **nulidad absoluta**.

### 3. El acto no genera derechos válidos y puede ser revocado – Artículo 21

Cuando un acto administrativo es nulo por estas razones, **no adquiere estabilidad jurídica** ni puede generar derechos válidos frente al interés público. Por ello, la propia Administración **tiene la facultad y el deber de revocar el acto**, incluso sin necesidad de acudir a una instancia judicial, con el fin de restablecer la legalidad y proteger el interés público educativo.

### 4. No se trata de un simple acto anulable – Artículo 22

Este no es un caso de un acto que pueda corregirse fácilmente. La resolución afecta derechos concretos de los recurrentes y compromete el orden público educativo. Por lo tanto, no puede considerarse un acto meramente "anulable", sino un acto **claramente inválido**, que no debe mantenerse dentro del sistema jurídico.

### 5. El acto no puede ser subsanado – Artículo 24

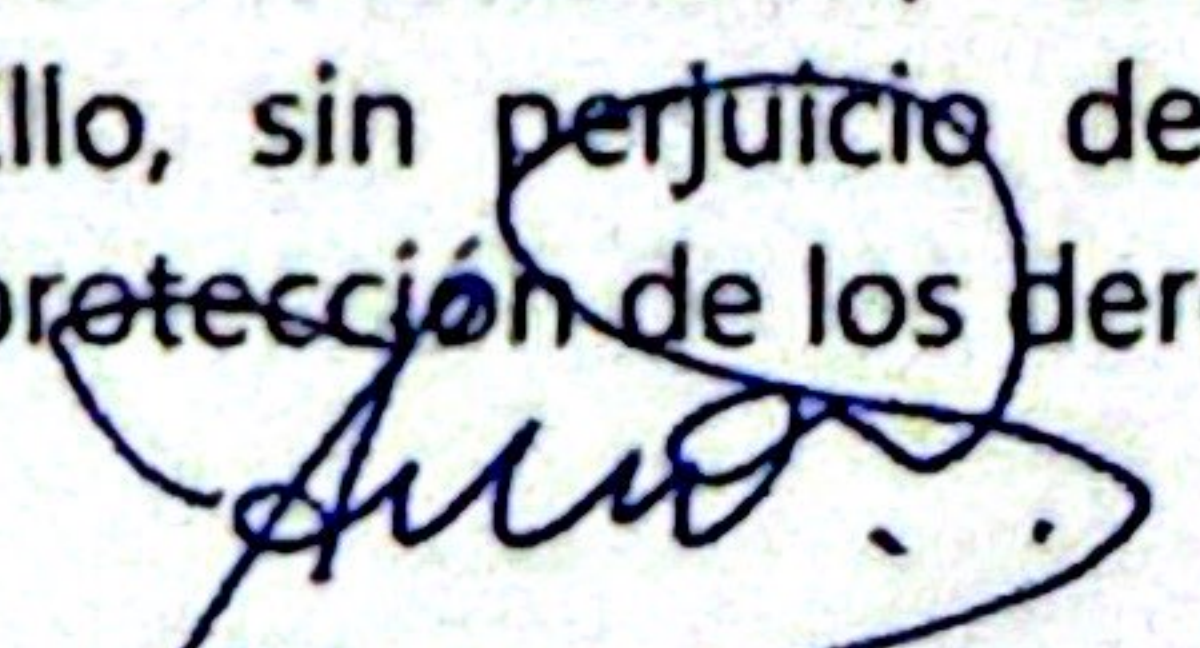
Las fallas detectadas no son errores de forma ni problemas menores que puedan solucionarse con una aclaración o ratificación posterior. El problema central es que **nunca existió el derecho legal del o los solicitantes**, y ese defecto no puede corregirse después. Por ello, la posibilidad de subsanación prevista en la ley **no es aplicable** a este caso.

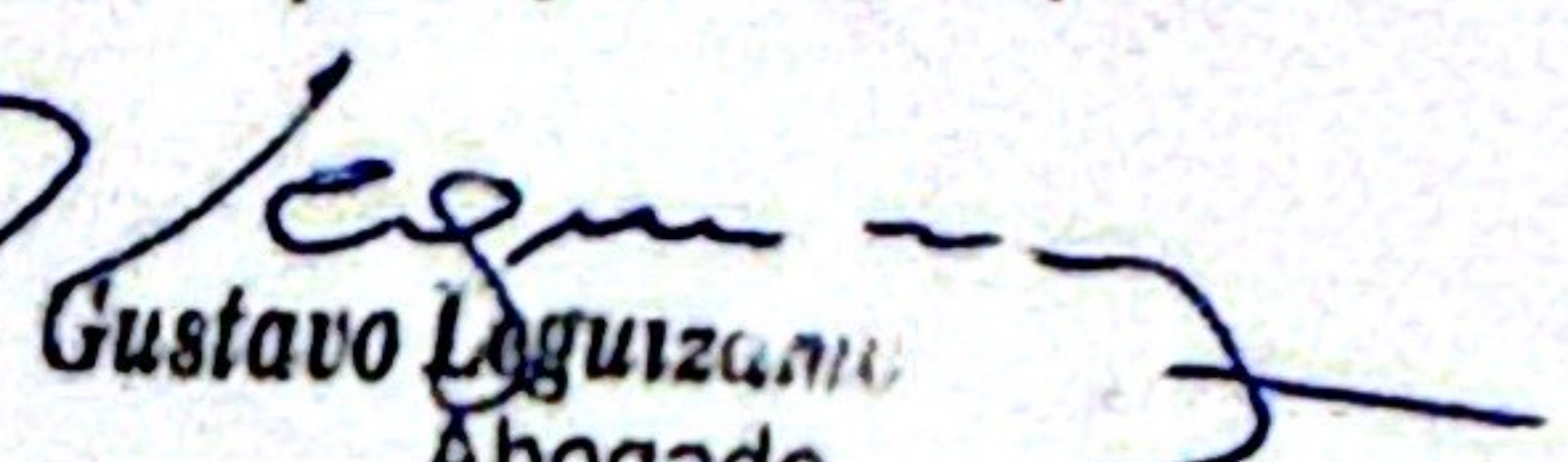
### 6. No se trata de errores materiales – Artículo 25


Finalmente, no estamos ante errores de escritura, cálculo o detalles formales. Se trata de **errores graves de hecho y de derecho**, que influyeron directamente en el contenido y sentido de la resolución, razón por la cual el régimen de corrección de errores materiales no resulta aplicable.

## V. CONSECUENCIA

Por todo lo expuesto, corresponde concluir que la **Resolución CONES N° 934/2025 es nula**, y que debe ser **dejada sin efecto por la propia Administración**, conforme a lo previsto en los artículos 19, 20 y 21. Ello, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan promoverse para la protección de los derechos afectados.

  
RICARDO ANTAR MOREL  
ABOGADO  
Matrícula C.S.J. N° 13.395

  
Gustavo Loguizaga  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 36.30


  
Richar S. Rojas L.  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

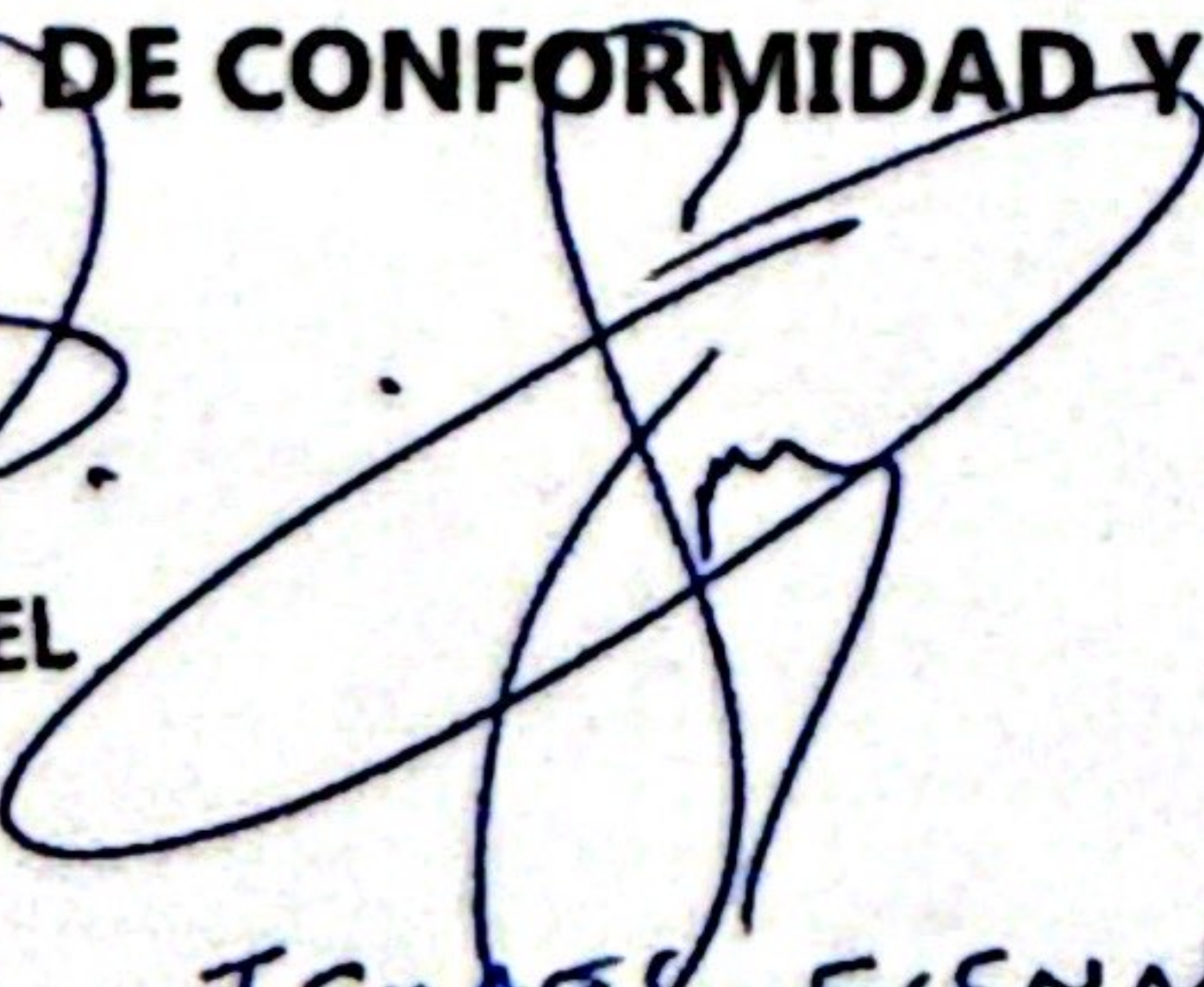
## V. PETITORIO


Por todo lo expuesto, solicitamos:

1. Se tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente **Recurso de Reconsideración**.
2. Se **revoque íntegramente** la **Resolución CONES N° 934/2025** por incumplimiento de los artículos **7, 8, 9, 10 y 11** relativos a la regularidad y validez del acto administrativo.
3. Se disponga la **suspensión inmediata de sus efectos**, hasta tanto se acredite fehacientemente la legitimación jurídica del eventual solicitante, mediante el instrumento de transferencia de derechos correspondiente, inexistente a la fecha.

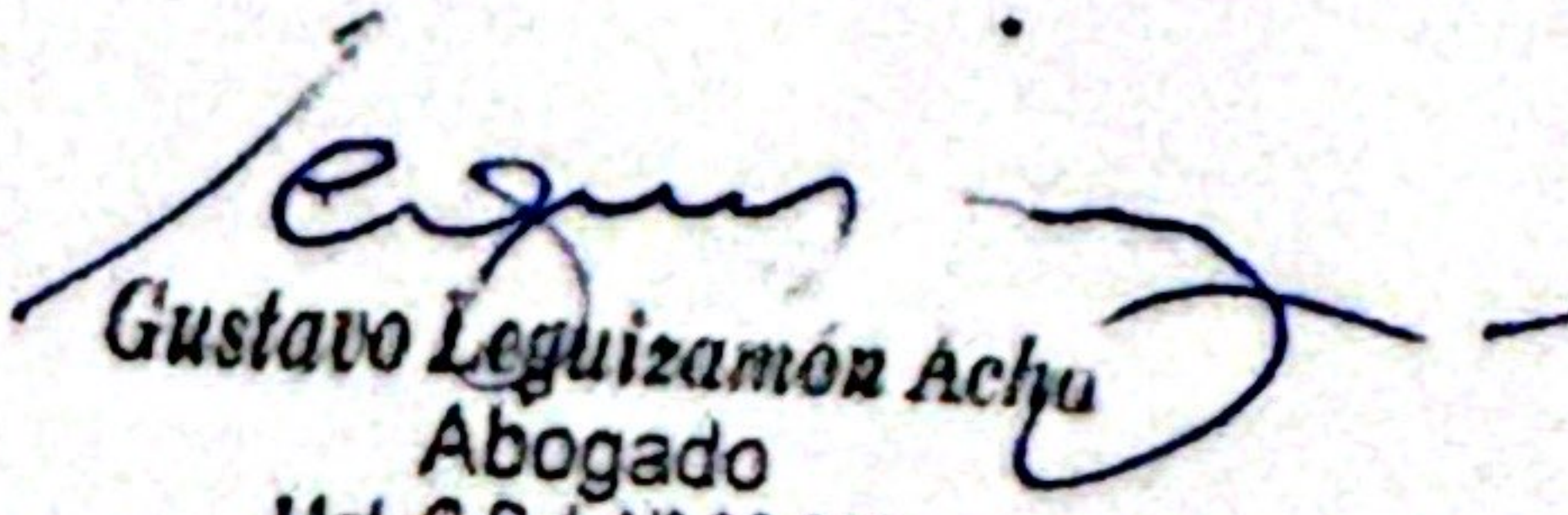
**PROVEER DE CONFORMIDAD Y SERA JUSTICIA**

  
RICARDO ANTAR MOREL  
ABOGADO  
Matricula C.S.J. N° 13.395

  
ISMAEL FENNON  
S.350.324

  
Richar S. Rojas  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 35.215

6

  
Gustavo Leguizamón Acha  
Abogado  
Mat. C.S.J. N° 36.395